



Grupos civiles armados han tomado el control de municipios michoacanos como Buenavista Tomatlán.

Adán García

Michoacán: al borde del Estado fallido

>PRIMERA PARTE DE DOS

Seis años después del inicio de la guerra contra el narco, y con más de mil 800 muertos en el estado el gobierno federal emprende nueva estrategia

Agencia Reforma

México, D.F. - Grupos armados extorsionan, secuestran y matan a empresarios y políticos; incendian bodegas, camiones, astilleros, comercios y gasolineras; bloquean carreteras y controlan el acceso a comunidades. Cobran derecho de piso en toda la entidad.

Grupos civiles, presuntamente apoyados por cárteles rivales, se arman para defenderse; toman alcaldías, desarmen a las policías municipales, colocan retenes, hacen rondines y se autoproclaman como la autoridad en al menos tres pueblos: La Ruana (municipio de Buenavista Toma-

tlán), Tepalcatepec y Coalcomán. "Policías comunitarios", se autonombran. Se comunican vía Facebook, convocan con cohetes a miles de personas para llenar una plaza en menos de 15 minutos, piden la comprensión de la ciudadanía y el apoyo de las Fuerzas Federales. Declaran la guerra a los Caballeros Templarios (grupo conocido anteriormente como La Familia Michoacana); se enfrentan con ellos en comunidades y municipios de la Tierra Caliente. Caen muertos de ambos bandos.

Mientras esto ocurre, el gobernador se ausenta por enfermedad. El PRI maniobra para conseguir en el Congreso local una licencia de 90 días que podría ser renovada para evitar la obligación legal de convocar a nuevas elecciones. Y coloca como gobernador interino a Jesús Reyna, secretario general de Gobierno de la administración fallida de Fausto Vallejo.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Elías Álvarez Hernández, renuncia

desde febrero, y hasta mayo es nombrado un general brigadier como sustituto. En esos tres meses se multiplican los homicidios, las extorsiones, los secuestros, la aparición de "policías comunitarias" y los enfrentamientos entre civiles.

Los maestros de la CNTE se movilizan contra la reforma educativa y, en su reclamo, toman las calles de Morelia y paralizan escuelas. Los estudiantes normalistas plagian a 5 policías estatales, secuestran 64 vehículos y saquean mercancías para reclamar mil 160 plazas -y otras prebendas- a un gobierno que se declara en quiebra financiera por pasivos que superan los 38 mil millones de pesos. La deuda y las irregularidades heredadas por la anterior administración ahogan a un gobierno que, aun así, consigue la autorización de los diputados locales para solicitar una nueva línea de crédito, por más de 9 mil millones de pesos.

Comerciantes, empresarios y transportistas exigen ser indemnizados por los da-

ños provocados con los bloqueos, y urgen a que se recupere la gobernabilidad.

Los obispos lanzan un desesperado llamado de auxilio: "¡No es posible seguir viviendo así!", dicen en una carta en la que lamentan la sangre derramada, la angustia de las víctimas, las ejecuciones hechas con crueldad y frialdad inhumanas, el dolor, la incertidumbre, el miedo...

Un senador del PAN exige la desaparición de poderes, y horas después el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia que, tras seis meses de administración, ha decidido al fin intervenir en Michoacán.

Nuevamente -como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006- la Secretaría de Gobernación anuncia un despliegue militar para recobrar la paz y tranquilidad en la entidad.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en el sexenio anterior, esta vez el Presidente evita pararse en Michoacán. De hecho, Enrique Peña Nieto no ha vuelto desde que era candidato